

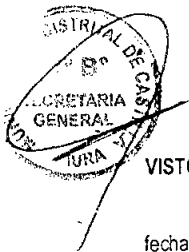


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

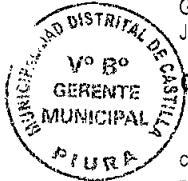
N° 015-2018-MDC.A.

CASTILLA, 10 de Enero de 2018



VISTO:

La Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC de 08 de noviembre de 2017, Expediente Administrativo N° 030293 de fecha 24 de Noviembre de 2017 presentado por la Sra. Deysy Emérita García Frías, quien interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC, Informe N° 891-2017-MDC-GAT de fecha 05 de Diciembre de 2017 emitido por la Gerencia de Administración Tributaria, Informe N° 007-2018-MDC-GAJ de fecha 08 de enero de 2018 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica y;



CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 28607, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;



Que, uno de los principios rectores que sustenta el procedimiento administrativo, es el Principio de Buena Fe Procedimental, prescrito en el Art. IV, inciso 1.8) del Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, el cual señala que: "La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental";



Que, en el mismo sentido, el Principio del debido procedimiento, señalado en el Art. IV, inciso 1.2) de la norma mencionada en el párrafo precedente, sostiene: "Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten (...);



Que, con Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC de 08 de noviembre de 2017 emitida por la Gerencia de Administración Tributaria, se señala en su Artículo Primero: "Declarar Infundado el recurso de Reconsideración interpuesto a la Papeleta de Multa Administrativa N° 00524 de fecha 05 de julio de 2017, presentada por García Frías Deysy Emérita, identificada con domicilio en Av. Tacna N° 201 del Distrito de Castilla, y en consecuencia continuar con la cobranza de las papeletas de multa administrativa N° 524 de fecha 05 de julio de 2017 por la comisión de la infracción identificada con el Código U -011 a. " Por ejecutar tipo de Intervención (Construcción, edificación, remodelación) sin licencia respectiva"



Que, el Artículo 1°, inciso 1.1, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, define a los actos administrativos como: "Las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta". Así mismo, el inciso 1.2.1, refiere que no son actos administrativos: "Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan". En el presente caso, nos encontramos ante la resolución de un acto administrativo;

Que, respecto de la Validez de los actos administrativos, el artículo 8° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General refiere: "El acto administrativo es válido cuando es dictado conforme al ordenamiento jurídico; es decir, el acto emitido observando los requisitos de formación establecidos en la citada ley. Por tanto, contrario sensu, el acto administrativo "inválido" sería aquel en el que existe discordancia entre el acto y el ordenamiento jurídico siendo un acto ilegal, estando inmerso en alguna de las causales de invalidez trascendentes o relevantes previstas por el artículo 10 de la Ley;

Así mismo, el Artículo 9°, de la Ley acotada en el párrafo anterior, define que: "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda";



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 015-2018-MDC.A.

CASTILLA, 10 de Enero de 2018

Que, en virtud de lo antes expuesto, mediante Expediente Administrativo N° 030293 de fecha 24 de Noviembre de 2017 presentado por la Sra. Deysy Emérita García Frías, quien interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC.

Que, según lo dispuesto en el Artículo 118.1° del D.S 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General, concordante con lo señalado en el Artículo 109° y 206° de la Ley N° 27444, el administrado frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos;

Que con Informe N° 891-2017-MDC-GAT de fecha 05 de Diciembre de 2017, la Gerencia de Administración Tributaria señala lo siguiente: *"Que visto el expediente en grado de apelación, donde se pide la anulación de la Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC de fecha 08.11.2017 y del análisis de narración fáctica de la misma, se aprecia que el contribuyente ha incumplido con pagar los derechos correspondientes al permiso de construcción, así mismo se corrobora que, si fue visitada por personal de la entidad, tal como lo refiere el ACTA DE VERIFICACION IN SITU N° 04726, el cual refuerza la infracción cometida por la administrada, POR LO TANTO SE DEBE DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE APELACION CONTRA LA RESOLUCION DE GERENCIA N° 807-2017-GATyR-MDC de fecha 08.11.2017 salvo opinión contraria. Asimismo señala que habiendo revisado el expediente antes mencionado escrito de fecha 24.06.2017 con número de expediente N° 030293 sobre Apelación de Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC y estando el expediente completo y de acuerdo a la normativa establecida en la Ley N° 27444 en su artículo 209, nos dice que el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente sustentación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna, para que eleve lo actuado al superior jerárquico, en este caso corresponde resolver al órgano máximo de la Municipalidad Distrital de Castilla.*

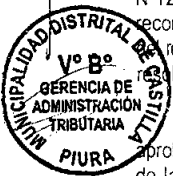
Que, el Artículo 11 del Decreto Legislativo N°1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo refiere: "11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley";

Que, en el artículo 207° contenido en el Título III Capítulo II de la Ley 27444, ha sido modificado mediante Decreto Legislativo N°1272, el cual respecto de los Recursos administrativos, prescribe: "207.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación. Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición de recurso administrativo de revisión. 207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días";

Que, el numeral 12°, del Artículo 97°, del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla, aprobado con Ordenanza Municipal N°016-2015-CDC, y modificado con Ordenanza Municipal N° N°012-2016-CDC; establece que dentro de las funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica, esta: "Emitir opinión legal sobre los anteproyectos y proyectos de las normas municipales: Ordenanzas, Acuerdos, Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía o dar conformidad a los mismos". Así mismo, el numeral 13), señala que la Gerencia de Asesoría Jurídica, tiene como función: "Asesorar a la Alcaldía, al Concejo Municipal y a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, en asuntos jurídicos, absolviendo las consultas respecto a la interpretación de los alcances y aplicación de las normas constitucionales, normas legales y normas administrativas". En la misma línea, el numeral 15) señala que Asesoría Jurídica, debe: "Emitir informes concluyentes en procedimientos administrativos cuando el fundamento de la pretensión sea razonablemente discutible o los hechos sean controvertidos jurídicamente";

Que, con Informe N° 007-2018-MDC-GAJ de fecha 08 de enero de 2018 la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite su informe legal, sobre el particular, de conformidad con los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

Que, la Municipalidad Distrital de Castilla goza de potestad sancionadora según lo establece el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, al precisar que: "Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones Judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias. Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras (...)", siendo ello así, y en virtud a las atribuciones conferidas, esta entidad edilicia aprobó mediante Ordenanza Municipal N° 002-2007-MDC el Reglamento de Aplicación de Sanciones – RAS que contiene a vez el CUIS – Cuadro Único de Infracciones y





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 015-2018-MDC.A.

CASTILLA, 10 de Enero de 2018

Funciones, disposiciones que de conformidad con el Artículo 40° de la citada ley, constituyen normas de carácter imperativo en su ámbito de aplicación dentro de la jurisdicción que les compete, en este caso, el distrito de Castilla.

Que, según el numeral 215.1 del artículo 215° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, "(...) frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo". En tal sentido el numeral 216.1 del artículo 216° de la citada norma señala que los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración; y, b) Recurso de apelación.

Que, de conformidad con el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Que, visto al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC de fecha 08.11.2017, presentado por la administrada GARCÍA FRÍAS DEYSY EMÉRITA, con DNI N° 02667647, a esta entidad aduciendo en su fundamentación fáctica que el recurrente indica que con fecha 14 de noviembre de 2017 se le ha notificado la resolución materia de apelación, y que en uno de los considerandos se le indica que ha incumplido con pagar los derechos correspondientes a permiso de construcción, lo que señala que es totalmente falso, ya que si ha cumplido con pagar la licencia de construcción del 1er, 2do y 3er piso, como consta en las copias que adjunta a su escrito de apelación.

Que, con Informe N° 891-2017-MDC-GAT de fecha 05.12.2017, el Gerente de Administración Tributaria emite su opinión respecto al recurso de apelación que interpone GARCÍA FRÍAS DEYSY EMÉRITA, con DNI N° 02667647, indicando que visto el expediente en grado de apelación, donde se pide la anulación de la Resolución de Gerencia 807-2017-GATyR-MDC de fecha 08.11.2017, y del análisis de narración fáctica de la misma, se concluye que la administrada no ha cumplido con pagar los derechos correspondientes al permiso de construcción, asimismo se corrobora que, si fue visitada por personal de la entidad, tal como lo refiere el ACTA DE VERIFICACIÓN IN SITU N° 04726, el cual refuerza la comisión de la infracción identificada con el Código U-011 "Por ejecutar cualquier tipo de intervención (Construcción, Remodelación, Refacción, etc.) o edificación sin licencia respectiva (detectado por la autoridad municipal)". Por lo tanto, se debe declarar infundado el recurso de apelación contra de la Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC de fecha 08.11.2017.

No obstante lo mencionado, se ha procedido a revisar los informes pertinentes del área de fiscalización que obran en el expediente remitido por el Gerente de Administración Tributaria que son el Informe N° 1739-2017-MDC-GAT-SGFR de fecha 08.11.2017 emitido por el Sub Gerente de Fiscalización y el Acta de Verificación In Situ N° 04726. Asimismo, se ha revisado el contenido de la Papeleta de Multa Administrativa N° 524-2017 de fecha 25.07.2017 contenida en la Resolución de Multa N° 162-2017 de fecha 01.08.2017 en cuyo documento expresa la existencia de la infracción a la Ordenanza Municipal 002-2017 con Código U-011 "Por ejecutar cualquier tipo de intervención (Construcción, Remodelación, Refacción, etc.) o edificación sin licencia respectiva (detectado por la autoridad municipal)." sindicándose como titular de las infracciones al apelante.

Que, respecto a los puntos antes indicados, resulta aplicable lo señalado en el numeral 661.1 del artículo 66° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, por el cual los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento; en concordancia con lo previsto en el numeral 171.2 del artículo 171° de la precitada norma en la cual se establece que corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

Al respecto, resulta de aplicación lo prescrito en el artículo 175° de la citada norma el cual establece que los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. Asimismo, es aplicable lo dispuesto en el numeral 1.7. del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, sobre Principio de presunción de veracidad por el cual se establece que en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Del mismo modo, se tendrá en consideración el artículo 174° de la norma bajo análisis por el que no será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 015-2018-MDC.A.

CASTILLA, 10 de Enero de 2018

Que, visto el recurso de apelación presentado por la administrada, así como el Informe Nº 891-2017-MDC-GAT de fecha 05.12.2017, emitido por el Gerente de Administración Tributaria, el Acta de Verificación In Situ Nº 04726 y el Informe Nº 1739-2017-MDC-GAT-SGFR de fecha 08.11.2017, emitido por el Sub Gerente de Fiscalización, revisado el contenido de la Papeleta de Multa Administrativa Nº 524-2017 de fecha 25.07.2017, contenida en la Resolución de Multa Nº 162-2017 de fecha 01.08.2017, la cual se aprecia la manifestación de los hechos expresando la existencia de la infracción a la Ordenanza Municipal 002-2017 con Código U-011 "Por ejecutar cualquier tipo de intervención (Construcción, Remodelación, Refacción, etc.) o edificación sin licencia respectiva (detectado por la autoridad municipal." sindicándose como titular de las infracciones al apelante, se tiene que dichos escritos se sujetan a lo dispuesto en el numeral 1.7. del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley Nº 27444, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, sobre Principio de presunción de veracidad toda vez que les asiste la presunción juris tantum de que dichas declaraciones han sido formulados en la forma prescrita por esta Ley y responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, máxime si de acuerdo a lo prescrito por el artículo 174º del T.U.O. de la Ley Nº 27444, se dispone que no será actuada prueba respecto a hechos sujetos a presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior. En tal sentido, los hechos contenidos en los documentos antes señalados no han sido desvirtuados por el apelante con medios probatorios idóneos que incidan en la decisión a esta instancia administrativa.

En tal sentido, visto el expediente administrativo, y en concordancia con lo señalado en el Informe Nº 891-2017-MDC-GAT de fecha 05.12.2017, emitido por el Gerente de Administración Tributaria, no obran medios probatorios por parte del administrado que permitan desacreditar que al tiempo de la acción de fiscalización a que se refiere el Acta de Verificación In Situ Nº 04726 el administrado no haya incurrido en la comisión de la infracción identificada con Código U-011 "Por ejecutar cualquier tipo de intervención (Construcción, Remodelación, Refacción, etc.) o edificación sin licencia respectiva (detectado por la autoridad municipal." Sindicándose como titular de las infracciones al apelante. Por lo que, estando al principio de veracidad, la administrada GARCÍA FRÍAS DEYSI EMÉRITA, con DNI Nº 02667647, carece de medio probatorio suficiente que desvirtúe lo establecido en la Papeleta de Multa Administrativa Nº 524-2017 de fecha 25.07.2017, contenida en la Resolución de Multa Nº 162-2017 de fecha 01.08.2017, por la comisión de la infracción identificada con el Código U-011 según el CUIS de la entidad.

Que, finalmente, el órgano competente para resolver el presente recurso como lo señala el artículo 6º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al alcalde como representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Asimismo, según el artículo 20.6 de la citada ley, dentro de sus atribuciones se encuentra el de "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas". Del mismo modo, es de aplicación lo previsto en el artículo 39º de la Ley Nº 27972 que dispone que el alcalde "Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo", debiéndose entender además que, según el artículo 226º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, con la emisión de dicha Resolución se da por agotada la vía administrativa;

Que, según los fundamentos descritos, esta Gerencia de Asesoría Jurídica opina: "Que, se recomienda declarar INFUNDADO el recurso de apelación contenido en el Expediente Nº 030293 de fecha 24.11.2017 interpuesto por la administrada GARCÍA FRÍAS DEYSI EMÉRITA, con DNI Nº 02667647, con domicilio en Av. Tacna Nº 201, distrito de Castilla, departamento de Piura, en contra de la Resolución de Gerencia Nº 807-2017-GATyR-MDC de fecha 08.11.2017, de acuerdo a las consideraciones indicadas en el presente informe. Asimismo recomienda remitir los actuados a la Gerencia Municipal a fin de que se emita la correspondiente Resolución de Alcaldía de conformidad con el artículo 44º de la Ordenanza Municipal Nº 002-2017-MDC de fecha 24.04.2017 y el artículo 43º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En mérito del literal b del numeral 226.2. del artículo 226º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, téngase por agotada la vía administrativa, concordante con el artículo 50º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, debiéndose notificar al contribuyente de acuerdo a ley y con copia informativa a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva";

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de esta Municipalidad Distrital de Castilla, aprobado con Ordenanza Municipal Nº 016-2015-CDC y modificado con Ordenanza Municipal Nº 12-2016-CDC, señala en su artículo 21º que entre las funciones específicas de la Gerencia Municipal están: Numeral 9). Supervisar a las Gerencias y Subgerencias en la ejecución del control previo y control concurrente de sus procedimientos y actos administrativos y/o de los servicios públicos. Numeral 10). Asesorar a la Alcaldía y al Concejo Municipal en materia administrativa asignada a los órganos de asesoramiento, de apoyo y de línea; Numeral 37). Proponer Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía para regular los procedimientos administrativos (...), y numeral 38). Dirigir y controlar la ejecución de las Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo, Resoluciones de Concejo, Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía, realizando el seguimiento del cumplimiento oportuno y eficiente de los mismos, a través de las diferentes Gerencias bajo su dependencia. Que en virtud de lo antes expuesto, y con la revisión del análisis jurídico, por el área competente, mediante proveído de fecha 09 de Enero de 2017, la Gerencia Municipal solicita la emisión de la resolución de alcaldía correspondiente;

Por tanto, en virtud de los fundamentos antes esgrimidos, el titular de la entidad, ejerce su actuación de conformidad con lo establecido en el Artículo 20.6º, de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual refiere que, dentro de las Atribuciones del Alcalde, están: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas". En el mismo sentido, el Artículo 39º, sobre Normas Municipales, dice a letra: "(...) El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 015-2018-MDC.A.

CASTILLA, 10 de Enero de 2018

alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo", esto concordante con lo establecido en el Artículo 43° del mismo cuerpo legal".

Con las visas de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración Tributaria, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación presentado mediante Expediente Administrativo N° 030293 de fecha 24 de noviembre de 2017, por la Sra. **DEYSY EMERITA GARCIA FRIAS**, en contra de la Resolución de Gerencia N° 807-2017-GATyR-MDC de fecha 08.11.2017, de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa, de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- TENGANSE, por agotada la vía administrativa de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del numeral 226.2. del artículo 226° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, téngase por agotada la vía administrativa, concordante con el artículo 50° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a las Gerencias: Municipal, Asesoría Jurídica, Administración Tributaria, para sus fines y conocimiento; y a la Sra. Deysy Emerita García Frías, con domicilio en Av. Tacna N° 201 – Castilla.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicación la presente Resolución, y sus anexos, de ser el caso, en el portal Web de la Municipalidad Distrital de Castilla: <http://www.municastilla.gob.pe>

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA
[Firma]
Ing. Luis Alberto Ramírez Ramírez
ALCALDE

